

En este número

Uno de los temas más polémicos durante los años setenta y lo que va de los ochenta es la crisis económica. Tanto entre los economistas burgueses como entre los marxistas se ha desatado un debate cuya intensidad se corresponde con la de la crisis misma. Evidentemente, no es un problema que concierna sólo a los expertos, dado que la forma de interpretar la crisis y las propuestas de solución tienen consecuencias políticas inmediatas. Tan es así que cualquier política económica es simultáneamente una estrategia política con intenciones de redefinir la relación entre las clases (imponiendo determinadas condiciones de lucha). Hoy, a la sombra de la recesión en Estados Unidos y con la economía mexicana en condiciones todavía más alarmantes que en 1976, parece innegable que el asunto de la crisis no es ni trivial ni pasajero, sino el problema político más importante que tienen que enfrentar los marxistas.

Es por ello que publicamos en este número el ensayo de Andre Gunder Frank. En él se explica, por una parte, los planteamientos económicos keynesianos y monetaristas, y por la otra, la política económica de los gobiernos de Thatcher y Reagan-Gunder Frank se acerca al análisis de la teoría keynesiana apuntando que su principal error consiste en suponer la existencia de un mercado competitivo, cuando en realidad es monopolístico, y un Estado nacional capaz de imponer sus lineamientos nacional e internacionalmente, cuestión dejó de ser cierta con la pérdida de hegemonía económica de Estados Unidos durante la última década y media. Señala que incluso es dudoso si fue la política económica keynesiana la que permitió el auge de posguerra, o si, por el contrario, el keynesianismo sólo “teorizó” la expansión económica posibilitada por los efectos de la guerra.

Acotados los errores del keynesianismo, Gunder Frank muestra cómo éstos son compartidos por los monetaristas que, en un sentido, no hacen más que poner de cabeza a Keynes, ya que argumentan que la oferta genera su propia demanda mientras que aquél sostenía que la demanda origina su propia oferta. El descrédito del keynesianismo, según Gunder Frank, se debe en realidad más a su no correspondencia con las necesidades actuales del capital que a sus deficiencias teóricas. El interés principal de los capitalistas, hoy, para recuperar la tasa de ganancia, es reducir los costos de producción, tanto los privados como los públicos, y requieren de economistas que puedan teorizar esta necesidad.

Las políticas económicas estadounidenses e inglesas se presentan como una mezcla de monetarismo (bajar el circulante para frenar la inflación), economía del lado de la oferta (reducción de impuestos) y keynesianismo militarista (incrementar el gasto militar y cortar el gasto social). Sin embargo, estas medidas, según Gunder Frank, no han resuelto los problemas inflacionarios y de desempleo, ni han estimulado la inversión productiva y la innovación tecnológica en campos no militares.

En vista del fracaso, Gunder Frank prevé que se implementarán políticas económicas consistentes en una planificación estatal con control de salarios, precios, inversión e importaciones. Una política económica de estas características tiene para Gunder Frank como correlato político la exacerbación del nacionalismo de derecha y un incremento de la represión, especialmente contra los grupos más afectados por la crisis. Apunta la posibilidad, meses antes del conflicto de las Malvinas, de nuevas guerras imperialistas en el Tercer Mundo.

Lo que sugiere el ensayo es que ni las políticas económicas keynesianas ni monetaristas serán capaces de sacar a la economía capitalista mundial de su crisis, y plantea la perspectiva de un periodo largo de estancamiento con crecimiento errático. Según este planteamiento, los temas de debate relevantes serían no las supuestas contradicciones entre monetarismo y keynesianismo, sino el análisis de las transformaciones profundas del capital y sus efectos sobre la clase trabajadora internacional. Y, en el entendido de que los periodos de crisis son periodos de transición, lo que los hace especialmente susceptibles de ser transformados por la acción política, un análisis concienzudo de la actuación de las fuerzas sociales.

—Asa Cristina Laurell

La tecnología no es un producto social neutro. Ligada directamente al proceso de trabajo, la adopción de nuevas tecnologías en cualquier rama productiva repercute de inmediato en las esferas de la producción y de la productividad, en las formas de organización del trabajo y en las condiciones de seguridad e higiene dentro de las que se desenvuelve la fuerza laboral. Pero, además de en el ámbito del propio proceso de trabajo, las causas y consecuencias de la modernización tecnológica pueden y deben rastrearse también en otros órdenes. Uno social y económico, previo a su incorporación, cuyas principales determinaciones son las siguientes: la acumulación del saber con fines privados, y su aplicación en última instancia decidida de acuerdo a las perspectivas de ganancia; la aptitud de los sujetos productivos, y su mayor o menor anuencia para adaptarse a los cambios que la nueva tecnología trae consigo.

Esto último remite a algunas de las consecuencias sociales *y políticas* de la innovación. Desde luego, su incorporación, modifica las condiciones del proceso de trabajo. Con ello, altera las relaciones sociales en el interior del espacio de la producción a favor del capital. Es decir, modifica el cuadro precedente de relaciones de fuerza dentro de la fábrica e implica, para los obreros, la necesidad de adoptar nuevas formas y niveles de organización y de lucha.

De allí que en los últimos tiempos el proceso de trabajo, núcleo de la dominación del capital, esté surgiendo como eje alrededor del cual se articulan las demandas obreras y se construyen formas inéditas de organización desde la base. Pero, en general, las respuestas obreras se han venido manifestando con retraso en relación a la velocidad de las innovaciones. En ello cabe una buena parte de responsabilidad a las formas de organización y de gestión y a las perspectivas del viejo sindicalismo.

Esto es particularmente cierto en el caso de México, en donde son todavía escasos los estudios sobre el proceso de trabajo y sobre el impacto de la modernización tecnológica. Varios de ellos, además, adolecen de una visión unilateral: pretenden estudiar el proceso de trabajo sin integrar en el análisis el peso histórico que traen consigo las formas de organización y de disciplina, la carga ideológica y la integración política al Estado que el sindicalismo charro ejerce sobre la clase obrera. Una y otra dimensiones, vinculadas en el análisis, pueden y deben iluminarse mutuamente. La integración de estos dos niveles de la existencia obrera, aunque sólo se esboza, le confiere relieve al trabajo sobre la minería mexicana de Sariego y Santana que publicamos en este número.

—Rubén Jiménez Ricárdez